

Rancagua, tres de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos:

Se reproduce la sentencia enalzada, salvo sus considerandos trigésimo segundo a cuadragésimo segundo y quincuagésimo segundo a quincuagésimo séptimo, que se eliminan.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que, en este procedimiento Comercial SolFresh SpA, deduce demanda ejecutiva en contra de doña María Ernestina Aguilera Otárola, por la cual persigue el cobro de la factura electrónica N° 25 por la suma de \$7.267.419, emitida con fecha 31 de marzo de 2017, por concepto de venta de 2.304 cajas de exportación de uva fresca, de 5 kilos cada una, de la variedad Red Globe, cumpliéndose previamente con la gestión preparatoria de notificación judicial, de conformidad al artículo 5 de la Ley 19.983.

Segundo: Que, en cuanto a la excepción del artículo 464 N° 7 del Código de Procedimiento Civil, basada en el incumplimiento del contrato que dio origen a la factura, señala la ejecutada que ello se produjo por la mala calidad de la fruta vendida por Comercial SolFresh SpA, lo que habría sido constatado por los surveyers o inspectores respectivos, los que para el caso de la fruta enviada a Brasil fueron la empresa Survey Pericias Ltda., la que en su informe de fecha 10 de mayo del 2017, consignó los defectos de la fruta, disponiendo su eliminación.

Tercero: Que, al respecto, cabe precisar que el inciso final del artículo 3 de la Ley 19.983, en su redacción vigente a la época de emisión de la factura, disponía: “Serán inoponibles a los cesionarios de una factura irrevocablemente aceptada, las excepciones personales que hubieren podido oponerse a los cedentes de la misma, así como aquellas fundadas en la falta total o parcial de entrega de las mercaderías o de la prestación del servicio, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que correspondan contra el emisor”, norma a partir de la cual se colige que el deudor de la factura sí puede oponer al emisor



de la misma tanto las excepciones personales que pueda hacer valer en su contra como las fundadas en la falta total o parcial de entrega de las mercaderías, sin que sea un obstáculo para ello que la factura se encuentre irrevocablemente aceptada, por cuanto dicha circunstancia sólo impide alegar las referidas defensas en contra del cesionario de una factura, más no en contra del acreedor de la relación comercial subyacente.

Cuarto: Que, asimismo, cabe recordar que a partir de la modificación introducida por la Ley 20.956 de 26 de octubre de 2016, al artículo 5 letra d) de la Ley 19.983, se eliminó la posibilidad de alegar, en la gestión preparatoria de notificación judicial de la factura, la falta de entrega de la mercadería o de la prestación del servicio, quedando restringida la impugnación sólo a la falsificación material de la factura o guía o guías de despacho respectivas, o del recibo a que se refiere el literal precedente, por lo que no puede privarse al ejecutado de fundar la excepción en comento, en la falta de entrega de la mercadería o de la prestación del servicio, por no haberlo alegado en la gestión preparatoria, como erróneamente lo entendió la juez a quo.

En este sentido y clarificando el punto en cuestión, la Excma. Corte Suprema ha señalado que: *“(...) cabe recordar que el procedimiento para el cobro ejecutivo de una factura contempla dos fases: a) La primera, llamada “gestión preparatoria de notificación de cobro de factura”, y b) la segunda: el procedimiento ejecutivo, según las reglas generales, del Título I del Libro III del Código de Procedimiento Civil. En efecto, tras haber operado un mecanismo de reconocimiento o verificación de condiciones mínimas habilitantes para proceder ejecutivamente, puede el ejecutante proceder compulsivamente respecto de lo reconocido, lo que no obsta a que el ejecutado, pueda, dentro del contradictorio del juicio ejecutivo, oponer alguna de las excepciones específicas o genéricas a que se refiere el artículo 464 del Código de Procedimiento Civil.*



Dicha conclusión se ve reforzada por el hecho que la finalidad de la gestión preparatoria difiere del juicio ejecutivo, ya que las excepciones que aquella contempla tienen por fin impugnar la copia de la factura para que ésta no tenga la suficiencia necesaria que permita el pago compulsivo de la obligación que contiene, en cambio, las excepciones del juicio ejecutivo tendrán un objeto distinto, pudiendo oponer el abanico de aquellas a que se refiere el artículo 464 del citado estatuto jurídico” (Sentencia Rol CS 4780-2013 de 31 de marzo de 2014).

Quinto: Que, sin perjuicio de lo anterior, cabe precisar que la ejecutada no alegó la falta de entrega de los bienes materia de la compraventa, sino la circunstancia que las uvas, luego de haber sido recibidas y exportadas, habrían sido rechazadas por el respectivo importador por su mala calidad.

En este sentido, si bien existe doctrina y jurisprudencia que ha reconocido la posibilidad de fundar la falta de exigibilidad de un título ejecutivo, basado en el incumplimiento contractual, alegando la excepción de contrato no cumplido, tal como se reconoce, por ejemplo, en la sentencia dictada por la Excma. Corte Suprema en el Rol 1281-2014, en el mismo fallo se precisa que el incumplimiento contractual que potencialmente puede tener la aptitud de afectar la exigibilidad del pago de una factura, no puede extenderse o afincarse en circunstancias que excedan a la falta de entrega de la mercadería o de la prestación del servicio, situación que precisamente se configura en la hipótesis de un eventual cumplimiento imperfecto por parte del ejecutante.

En la especie, resulta palmario que las uvas materia del contrato de compraventa fueron efectivamente entregadas por la empresa ejecutante, discutiéndose más bien la calidad de la fruta, circunstancia que no importa “falta de entrega de la mercadería”.

Por lo demás, cabe precisar que el incumplimiento del contrato se sustenta en la mala calidad de la fruta al ser recibida en el lugar de destino, habiendo señalado el propio ejecutado que fue su parte quien



se hizo cargo de los desembolsos por embalaje, frío, sanitario, transporte y cualquier otro asociado a la exportación de la fruta fresca, escenario en el que, más allá de la prueba rendida por la ejecutada, no es posible dar por establecido que la reclamada pudrición de la uva se produjera exclusivamente durante su producción y embalaje, pues no resulta posible descartar que ello se hubiese producido durante su transporte y exportación, todo lo cual justifica desestimar la excepción en comento.

Sexto: Que, por otra parte, en cuanto a la excepción de pago, la ejecutada señaló que pagó la factura materia de cobro, mediante transferencias bancarias efectuadas desde su cuenta corriente del Banco de Chile N° 2020485501 a la cuenta corriente de la sociedad Comercial Sol Fresh.

Séptimo: Que, con la prueba documental rendida en el proceso, en especial, con la que rola a folio 43 y la exhibición de documentos de folio 58, se tiene por acreditado que efectivamente la ejecutada transfirió desde su cuenta corriente a la cuenta vista que la ejecutante mantiene en el Banco del Estado, la suma de \$8.000.000 mediante tres transferencias efectuadas los días 12 y 13 de abril del 2017.

Octavo: Que, ahora bien, al absolver posiciones el representante legal de la ejecutante, don Jorge Clodomiro Silva Pizarro, respondiendo a las posiciones 11, 12, 13 y 14, señaló que los dineros de las tres transferencias recibidas, corresponden a la devolución de un préstamo efectuado a la ejecutada.

Noveno: Que, al respecto, cabe señalar que si bien la ejecutada no ha acompañado algún documento en el que conste que las transferencias efectuadas se hicieron para pagar la factura cobrada en autos, tal falta de precisión sólo tendría relevancia si la ejecutante hubiera demostrado la existencia de otras acreencias a las cuales pudieran haberse imputado las transferencias, cuestión que, sin embargo, no realizó, limitándose a plantear la existencia de un



supuesto mutuo de dinero, tal como lo dijo su representante legal al absolver posiciones.

Décimo: Que, conforme a tales razonamientos, al probarse por la ejecutada la realización de transferencias de dinero por un monto incluso levemente superior al valor de la factura y dado que no se demostró la existencia de otras acreencias a favor del ejecutante a las cuales pudiera imputarse el referido desembolso monetario, es posible concluir, en base a una presunción judicial y de acuerdo a los artículos 426 del Código de Procedimiento Civil y 1712 del Código Civil, que la ejecutada pagó la factura cobrada en este procedimiento mediante las referencias transferencias.

En cuanto a este medio de prueba, cabe recordar que a través de las presunciones judiciales, llamadas también simples, de hecho o de hombre, el juez “logra el resultado o inducción lógica de dar por conocido un hecho que no lo era, a través de otro que sí es conocido. El hecho que proporciona las bases para el razonamiento inductivo se llama indicio o hecho básico; el desconocido, al cual se llega por operación lógica, hecho presumido o presunción... Para que la presunción sea admisible es necesario que el hecho básico indicio esté completamente demostrado; en otro caso habrá que probarlo y esto señala que la presunción de hecho no modifica las reglas de la carga de la prueba” (Leonardo Prieto Castro, “Derecho Procesal Civil” volumen I, Madrid, 1978, N°169 pp. 181-182).

En el presente caso, a partir de dos hechos conocidos, como son la efectividad de las transferencias de dinero y la ausencia de otras obligaciones de la parte ejecutada en favor de la ejecutante, más el hecho de que tales desembolsos se hicieron en las semanas siguientes a la emisión de la factura, es posible deducir de manera lógica un hecho que en principio era desconocido, como lo es el pago de la factura, reuniéndose así las exigencias de gravedad, precisión y concordancia, que requiere una presunción judicial, siendo del caso destacar, además, que la referida conexión entre los hechos conocidos y aquel de carácter



desconocido, surge en forma indubitada de la circunstancia que el pago no puede carecer de causa, de modo tal que al demostrarse la existencia de sólo una causa posible, necesariamente debe concluirse que las transferencias estaban destinadas a saldar la única deuda establecida.

Undécimo: Que, por último, cabe señalar que al resolver de esta forma no se infringe la carga de la prueba de la parte ejecutada de probar su excepción, por cuanto, como se dijo precedentemente, a los hechos que surgen de la prueba documental y confesional rendida por la demandada, es posible sumar un medio de prueba adicional, pero a la vez determinante, como son las presunciones judiciales, todos los cuales, mediante su apreciación comparativa, de conformidad al artículo 428 del Código de Procedimiento Civil, permiten dar por acreditado el pago de la deuda, satisfaciendo así la carga probatoria impuesta a la ejecutada.

Por estas consideraciones y lo dispuesto, además, en los artículos 160, 186, 187, 213, 223, 227 y 471, todos del Código de Procedimiento Civil; 1568 y siguientes del Código Civil, **se revoca** la sentencia apelada de fecha cuatro de agosto de dos mil veinte, dictada por el Segundo Juzgado Civil de Rancagua, en la causa Rol C-30.137-2017, sólo en cuanto rechazó la excepción de pago de la deuda, contemplada en el numeral 9 del artículo 464 del citado código y, en su lugar, se declara que **se acoge la referida** excepción y, en consecuencia, se desestima la ejecución y se condena a la ejecutante al pago de las costas de la causa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 471 del Código adjetivo.

Regístrese y devuélvase.

Redacción del Ministro Pedro Caro Romero.

Rol N° 104-2021.Civil.-





XQPYKKXCBM

Pronunciado por la Segunda Sala de la C.A. de Rancagua integrada por los Ministros (as) Pedro Salvador Jesus Caro R., Michel Anthony Gonzalez C. y Abogado Integrante Jose Irazabal H. Rancagua, tres de septiembre de dos mil veintiuno.

En Rancagua, a tres de septiembre de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

